



Dirección General de Infancia,
Familias y Natalidad
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS, DENOMINADO “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS CON DIFICULTADES DE ADAPTACION SOCIOCULTURAL (26 PLAZAS)”.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

Los menores con medidas de protección de Guarda o de Tutela acordadas por la Comisión de Tutela del Menor están acogidos por la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad en Centros Residenciales que, bien son propios y son gestionados directamente por la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, o bien son contratados y están gestionados por Entidades.

El presente contrato se rige por la siguiente normativa que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento del objeto del contrato:

- La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido, en el caso de la Comunidad de Madrid, dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Así mismo, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, establece los principios rectores de la acción de las Administraciones Públicas en materia de infancia, y exige a las Entidades Públicas competentes la adecuada regulación, autorización, inspección y supervisión de las instituciones que acojan menores de edad.

Esta Ley Orgánica, así como la Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid, destacan como principio rector de la actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor. La segunda de las leyes mencionadas establece en sus artículos 56 y 63 que la tutela y la guarda podrán ejercerse por la Administración mediante la atención a los menores en centros residenciales. Por su parte, el artículo 66 contempla el derecho de los menores residentes en Centros Residenciales a acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad y que no sean satisfechas por el propio Centro.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1221389788158640024523**

- La Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y, en especial, de los menores de edad. En su artículo 10 se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros, reconociendo, respecto de los que se encuentren en España y con independencia de su situación administrativa, sus derechos a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales.
- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.
- La Resolución de fecha 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, tiene como objeto coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación.
- La Ley 2/1996 de 24 de junio, por la que se creó el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, encomienda a este Organismo ejercer las competencias que a la Comunidad de Madrid le corresponden en materia de protección de menores. Con la extinción del IMFM por Decreto 72/2015, de 7 de julio, en virtud del cual se modificó la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, se estableció que las competencias del Instituto fueran asumidas por la entonces Dirección General de la Familia y el Menor.
- Por su parte, el Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo, exige a estas Residencias el desarrollo de las funciones de educación y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6) y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.
- La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece en su artículo 35 el régimen aplicable a los menores no acompañados.
- El Real Decreto 557/2001, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, en cuyo título XI, capítulo III, desarrolla los requisitos, procedimientos y criterios de aplicación respecto al tratamiento de los menores extranjeros no acompañados.



- La Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre.
- La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que determina los sectores de infancia y juventud marginada como tributarios de atención por los Servicios Sociales, a fin de prestarles la adecuada protección previniendo su marginación, fomentando su participación social y favoreciendo su incorporación a la sociedad mediante actuaciones normalizadoras e integradoras. Ello de conformidad con los principios que el art. 3 de dicho texto legal señala como inspiradores de los Servicios Sociales y de entre los que cabe destacar el de responsabilidad pública y el de colaboración de la iniciativa privada.
- La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en la que se recoge que las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS). En concreto, el artículo 1º.3 establece que “...Las Administraciones públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados”.

Por su parte, el artículo 14 se refiere a los supuestos de “Atención Inmediata” estableciendo que “las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

Hemos de tener en cuenta que, atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que modifica el apartado 2 del art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El objeto del contrato consiste en el acogimiento residencial de 26 menores extranjeros no acompañados (MENAS) en acogimiento residencial, que presenten dificultades de adaptación social y cultural, así como problemas asociados al consumo de tóxicos, con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), y con medida de protección de tutela, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad en un recurso convivencial de 26 plazas.

En el objeto del contrato se incluye la acogida y atención para que estos menores consigan su integración social y cultural en este país, y en la cláusula III del Pliego de Prescripciones Técnicas se contempla el detalle de todas las prestaciones que conlleva, por lo que el objeto es completo y se relaciona directamente tanto con las competencias a ejercer por la Comunidad de Madrid como por las necesidades sociales a cubrir.



Según los últimos datos disponibles, si bien el número de menores migrantes que llegaron solos a Madrid durante el año 2019 ha disminuido respecto al año anterior, se ha incrementado el número de menores migrantes tutelados, lo que incide en la demanda de los recursos de atención.

A fecha 31 de diciembre de 2019 se encontraban tutelados 468 menores migrantes por la Comunidad de Madrid y con 470 plazas ocupadas por MENAS, en recursos específicos de MENAS y no MENAS.

Durante el año 2019, en la Comunidad de Madrid se abrieron un total de 790 expedientes (incluidas las segundas y terceras reaperturas por sucesivos ingresos) de presuntos menores extranjeros no acompañados (MENA), de los cuales 341 resultaron finalmente tutelados como menores extranjeros no acompañados tras quedar acreditada su minoría de edad.

Si bien, el incremento de plazas para menores migrantes, tanto públicas como de gestión indirecta es muy significativo, no existía un centro para menores migrantes que requiriesen una atención especializada más intensiva, por presentar conductas disruptivas y problemas de consumos de tóxicos.

Los menores que llegan con graves problemas de consumos de inhalantes, tienen con frecuencia reacciones violentas que provocan momentos en los que los profesionales y el personal de seguridad tienen una gran dificultad para garantizar el control y la seguridad del centro y de los menores, que se pone en grave riesgo, **por lo que hay que evitar un número excesivo de menores en los centros de acogida inicial.**

También está presente el peligro de que estos menores puedan ser manipulados por mafias, para integrarse en redes de delincuencia organizada y de terrorismo yihadista, si no se acogen y atienden de manera adecuada.

La necesidad de atención específica a estos menores es imprescindible ya que incluso en los recursos de atención normalizada a menores extranjeros no acompañados están poniendo de manifiesto dificultades en la atención, incluso en algún caso con riesgo de finalizar su actividad con esta Dirección General para los casos de menores que necesitan una intervención intensiva.

Por tanto, si bien actualmente la sobreocupación es menor, sin perjuicio de mantenerse la presión sobre recursos de protección que no están diseñados para la atención específica de estos menores, las anteriores circunstancias **obligan a poner en marcha de manera inmediata** este centro, ya que los menores a los que va dirigido **requieren necesidad de una atención especializada intensiva**, como consecuencia de sus dificultades de adaptación a contextos sociales normalizados, así como con problemas de conducta y/o relacionados con el consumo de tóxicos, por lo que si ya están estos menores de forma inmediata en un centro (1 de septiembre de 2019), se garantizarían los derechos de estos menores y por otro lado, se evitarían desgracias mayores, dada la escalada de violencia que está dando o que está apareciendo en los medios de comunicación.



Esta medida excepcional basada en el grave peligro se presenta como última ratio, después de haberse articulado diversos procedimientos para crear o reforzar recursos y que no han sido suficientes para resolver la situación creada. Si bien, está en tramitación un procedimiento abierto y urgente para este mismo objeto, no es una solución disponible a corto plazo y se considera necesario cubrir de forma inmediata las actuales necesidades de acogimiento de MENAS que precisan la atención especializada descrita.

A esta situación de llegada masiva de menores y de sobreocupación de los centros de acogida, hemos de sumar la problemática asociada a este perfil. De esta forma, nos encontramos con menores que presentan las siguientes características:

- A nivel psíquico: impulsividad, dificultades de autocontrol, escasa tolerancia a la frustración, endurecimiento emocional, falta de asertividad.
- A nivel social: ausencia de figuras adultas de referencia en nuestro país; proyecto migratorio sin definir; marginalidad; consumos asociados de sustancias tóxicas; dificultades de adaptación a contextos sociales normalizados (formativos, residenciales, de ocio y tiempo libre, etc.).
- A nivel formativo: escolaridad insuficiente en su país de origen; conocimientos y/o aprendizajes no adaptados a los planes formativos de nuestro país; escaso o nulo conocimiento del castellano, entre otras.

Por todo ello, teniendo en cuenta la normativa vigente y la actual situación de demanda de atención a menores extranjeros no acompañados con medida de protección, se hace necesario **ofrecer una solución duradera que dé respuesta a esta necesidad social**, por lo que se considera adecuado poner en marcha un proyecto de 26 plazas para estos menores, a fin de promover su adaptación cultural y social, y que, además, tienen problemas asociados al consumo de tóxicos.

Con el objeto del contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los **principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia**.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato de servicios para el Acogimiento Residencial de Menores Extranjeros No Acompañados, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), atendidos con cargo a esta Dirección General con problemas de adaptación cultural y social que, además, presenten problemas asociados al consumo de tóxicos.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA,
FAMILIAS Y NATALIDAD

Fdo.: Ana Sastre Campo

